

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



Auto - Ejecutivo	
DEMANDANTE	MARÍA VICTORIA MEJÍA TABARES
DEMANDADO	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU (ANTES EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD – METROSEGURIDAD)
RADICADO	05001-31-05-003-2022-00143-01
MAGISTRADA PONENTE	DRA. MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	SANCION MORATORIA
DECISIÓN	CONFIRMA.

Medellín, diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Estudiado, discutido y aprobado

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, adopta decisión de segunda instancia en el Proceso Ejecutivo Conexo promovido por **MARÍA VICTORIA MEJÍA TABARES**, a través de apoderado judicial contra la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA “ESU”** en los siguientes términos:

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 037**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I.- ANTECEDENTES.

Se resuelve el recurso ordinario de apelación interpuesto por la ejecutante contra del auto proferido por el Juez Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el

día 19 de abril de 2022, mediante el cual negó el mandamiento de pago deprecado.

II.- SUPUESTOS FÁCTICOS.

La señora **MARÍA VICTORIA MEJÍA TABARES**, a través de apoderado judicial promueve a continuación del proceso ordinario, **DEMANDA EJECUTIVA LABORAL CONEXA** contra la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA “ESU”** solicitando la ejecución de la sentencia de fecha 27 de febrero de 2015, por medio de la cual la SALA PRIMERA DUAL DE DESCONGESTIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, condenó entre otras cosas, a la entidad demandada, a pagar sanción moratoria establecida en el Decreto 797/1949, a partir del 20 de diciembre de 2007 y hasta cuando se cubra lo debido por prestaciones sociales e indemnización por despido injusto. Se afirma entonces que la ejecutada cumplió parcialmente la sentencia, toda vez que, a pesar que realizó el **10 de marzo de 2015**, consignación al Despacho por dicho concepto, debido a que se interpuso recurso de casación el título judicial solo fue entregado el **16 de diciembre de 2019**, motivo por el cual, precisa la parte ejecutante, que se debe reajustar la sanción moratoria entre el 11 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2019.

Se invoca a título de pretensiones:

“La suma de SETENTA Y SIETE MILLONES VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$77.021.330), por concepto de reajuste de la sanción moratoria ordenada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia del veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015), por mil setecientos treinta (1.730) días, por el período comprendido entre el once (11) de marzo de dos mil quince (2015) y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), a razón de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS (\$44.521,00) diarios, por la diferencia entre lo pagado por valor de CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$115.754.600,00) desde el veinte (20) de diciembre de dos mil siete (2007) y el diez (10) de marzo de dos mil quince (2015) y lo que debió ser pagado por valor de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (\$192.775.930,00), desde el veinte (20) de diciembre de dos mil siete (2007) y el treinta

y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) y las costas y agencias en derecho que se generen en el presente proceso”.

III.- DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el auto impugnado, de fecha 19 de abril de 2022 (PDF 05), el juez A Quo decidió negar el mandamiento de pago deprecado por la señora **MARÍA VICTORIA MEJÍA TABARES** y en su lugar dispuso el archivo del proceso, por considerar que la demandada EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA “ESU” el **10 de mayo de 2015** consignó a órdenes del juzgado, la suma de \$115.754.600,00, **correspondiente a la sanción moratoria de \$44.521 diarios desde el día 20 de diciembre de 2007 hasta el 10 de marzo de 2015.**

Concluyó afirmando el juez de instancia que, con el depósito judicial realizado por la entidad demandada, se generó la suspensión de la sanción moratoria y por tanto no habría lugar a proferir el mandamiento de pago.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

Inconforme con la decisión de primer grado, la parte ejecutante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación, manifestando que el juez de primer grado, confundió los verbos de consignar y pagar, por cuanto en el caso en concreto; si bien la entidad demandada el 10 de mayo de 2015, realizó la consignación de la sanción moratoria por la suma de (\$115.754.600,00), la misma fue pagada a la trabajadora- demandante, hasta el 16 de diciembre de 2019, esto es, una vez se surtió el recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Agregó también la parte recurrente que, al haberse efectuado el pago de las obligaciones solo hasta el año 2019, es conducta constitutiva de mala fe atribuible a la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA “ESU”, entidad que debe asumir el reajuste de la sanción moratoria, por falta de pago de salarios y prestaciones, hasta el día en que fueron realmente pagadas.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para resolver, lo primero que debe decirse es que la Sala es competente para resolver del recurso de apelación formulado por la parte ejecutante, ello al tenor de lo dispuesto por el numeral 8° del artículo 65 del CP.T y S.S., modificado por el 29 de la Ley 712 de 2001.

Antes de librar el mandamiento de pago, el administrador de justicia debe realizar un análisis de la factibilidad de la ejecución, tal como lo señalan los artículos 100 del CPT y de la Seguridad Social y 422 del Código General del Proceso, este último por aplicación analógica permitida por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

“ARTICULO 100 CPT y SS. PROCEDENCIA DE LA EJECUCIÓN. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, **que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante** o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.

Quando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso.”

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

Las características para que de un documento se predique que contiene una obligación expresa, clara y exigible, quieren decir lo siguiente: “*que la obligación sea expresa, quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente. Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación*

pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta”¹.

El artículo 306 del C.G.P., aplicable a esta causa por la remisión normativa contenida en el Artículo 145 ante la ausencia de norma reguladora especial, señala que el mandamiento de pago proferido ante la solicitud de ejecución con base en la sentencia, ha de librarse de acuerdo con lo contenido en su parte resolutive y las costas aprobadas, si fuera el caso.

Pues bien, en el asunto bajo estudio, la parte ejecutante alega que debió librarse mandamiento de pago por concepto de la sanción moratoria, reajustada desde el 11 de marzo de 2015, hasta 31 de diciembre de 2019, en (1.730) días, a razón de (\$44.521,00 diarios), para un total de **(\$77.021.330)**.

Conforme a lo anterior, el debate se contraerá a analizar si en efecto procede librar orden de apremio, en los términos y cuantía invocada por el apoderado de la parte demandante.

La parte demandante aduce como título ejecutivo, la sentencia de segunda instancia proferida por la SALA PRIMERA DUAL DE DESCONGESTIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, de fecha **27 de febrero de 2015²**, con ponencia del Magistrado, Dr. CARLOS MARIO GIRALDO BOTERO, por medio de la cual, se revoca el fallo proferido por el Juzgado Tercero Laboral Circuito de Medellín y ordena:

“PRIMERO: DECLARAR que la señora MARIA VICTORIA MEJIA TABARES y la EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD “METROSEGURIDAD”, existieron tres contratos fictos de trabajo a término indefinido cada uno, entre el 29 de abril de 2003 y el 30 de junio de 2005, el primero; entre el 24 de agosto de 2005 y el 23 de febrero de 2007, el segundo; y entre el 20 de abril y el 20 de septiembre de 2007, el tercero.

SEGUNDO: CONDENAR a la EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD “METROSEGURIDAD”, a reconocer y pagar a la señora MARIA VICTORIA MEJIA TABARES los siguientes conceptos y rubros:

¹ Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 22 de junio de 2001, Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque, Radicado 44001-23-31-000-1996-0686-01(13436).

² PDF 04 folio 8 a 35

*Total Primas de Servicio \$1.892.167,00 Total Vacaciones \$1.715.917,00
Total Prima Vacaciones \$1.715.917,00 Total Primas de Navidad
\$667.817,00 Total Cesantías \$2.638.612,00 Total Intereses Cesantías
\$228.019,00 Indemnización por despido injusto \$44.521,00.*

TERCERO: CONDENAR a la EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD “METROSEGURIDAD”, a reconocer y pagar a la señora MARIA VICTORIA MEJIA TABARES, la suma de \$44.521,00, diarios a partir del 20 de diciembre de 2007 y hasta cuando se cubra lo debido por prestaciones sociales e indemnización por despido injusto, como sanción moratoria establecida en el D.797/1949.

CUARTO: DECLARAR la prosperidad parcial de la excepción de prescripción, conforme a lo indicado en la parte motiva del presente proveído. QUINTO: ABSOLVER a la EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD “METROSEGURIDAD”, de las demás pretensiones incoadas en su contra.

SEXTO: CONDENAR en costas en ambas instancias a entidad demandada. Fíjense en esta instancia como agencias en derecho la suma de \$1.733.849,00”. (negrilla a propósito)

En contra de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Medellín, la parte demandada EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD “METROSEGURIDAD”, interpuso recurso extraordinario de casación, el cual se resolvió desfavorablemente mediante sentencia SL4958- 2019, Radicación n.º 71480, Acta 38, del 23 de octubre de 2019, con ponencia del Magistrado Dr. JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN³,

En este caso, es hecho probado, conforme así lo puso de manifiesto el abogado de la parte demandante en su escrito de apelación⁴, y se dejó sentado en el auto que negó el mandamiento de pago, que la EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD “METROSEGURIDAD”, consignó a órdenes del Despacho, el **10 de mayo de 2015**, la suma de **\$115.754.600,00** por concepto de sanción moratoria, causada desde el 20 de diciembre de 2007 al 10 de marzo de 2015, en cumplimiento de la orden judicial emitida por el Tribunal Superior de Medellín.

Afirmó el abogado apelante, que el pago por concepto de sanción moratoria, por valor de **\$115.754.600,00**, tan solo se hizo efectivo a la trabajadora-demandante el **16 de diciembre de 2019**.

³ PFD 4 y 3 del expediente digital.

⁴ PDF 07

De entrada, advierte esta Sala, que comparte el argumento del juez de la primera instancia, en el sentido que, en efecto, la consignación efectuada por la demandada EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD “METROSEGURIDAD”, por el valor de las prestaciones debidas y que originaron la imposición de la sanción moratoria, tuvo la virtualidad de suspender la sanción en comento en esa fecha, es decir, impidió que siguiera corriendo la misma, resaltando la Colegiatura que, también en esa data, el deudor consignó el valor de la sanción moratoria para ese momento.

Con base en las circunstancias descritas, para esta Sala la consignación que efectuó la demandada EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD “METROSEGURIDAD”, el **10 de mayo de 2015, producto de un desembolso efectuado voluntariamente por el deudor**, extinguió la obligación de la sanción moratoria a esa fecha, sin que pueda imputarse a la parte demandada tardanza en el pago efectivo, ni muchos menos mala fe, por cuanto, al adelantarse un proceso judicial en el que se pretendía la condena por dichos conceptos, **que aún se encontraba en trámite**, optó por consignar a órdenes del despacho de conocimiento lo debido, resaltando la Sala que ya la entrega del título judicial no dependía de dicho deudor sino del Juzgado de primera instancia.

En consecuencia, la decisión adoptada por el *A Quo* en este sentido se encuentra ajustada a derecho, y por ello será confirmada la providencia de primer grado.

Sin condena en costas.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto objeto de apelación, de origen y fecha conocidos.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: Se notificó en **ESTADOS** lo resuelto y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 147 del 22 de agosto de 2022.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>